

**PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
ORDINARIO**

EXPEDIENTE: PSO/21/2019

DENUNCIANTE: INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE
MÉXICO Y MUNICIPIOS

DENUNCIADO: PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. EN
D. CRESCENCIO VALENCIA
JUÁREZ



TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MÉXICO

Toluca de Lerdo, Estado de México, a uno de octubre de dos mil diecinueve.¹

VISTOS, para resolver, los autos que integran el expediente relativo al Procedimiento Sancionador Ordinario, **PSO/21/2019**, iniciado por la vista dada por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios; en contra del Partido Revolucionario Institucional, por el incumplimiento a la resolución dictada por el citado Instituto, dentro del Recurso de Revisión 02516/INFOEM/IP/RR/2017.

GLOSARIO	
CEEM:	Código Electoral del Estado de México
Consejo General:	Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México

¹ Salvo señalamiento expreso, todas las fechas corresponden al año dos mil dieciocho.

IEEM:	Instituto Electoral del Estado de México
INFOEM:	Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios
SAIMEX	Sistema de Acceso a la Información Mexiquense
PSO:	Procedimiento Sancionador Ordinario
PRI:	Partido Revolucionario Institucional
Secretario Ejecutivo:	Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México

ANTECEDENTES**I. TRÁMITE ANTE EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS**

- 1. Solicitud de información.** En fecha doce de octubre de dos mil diecisiete, se presentó a través del SAIMEX, solicitud de información respecto del PRI, registrada bajo el número de folio 00205/PRI/IP/2017.
- 2. Respuesta a la solicitud de información.** El tres de noviembre de dos mil diecisiete, el PRI dio respuesta a la solicitud 00205/PRI/IP/2017.
- 3. Interposición del recurso de revisión.** En fecha de seis de noviembre de dos mil diecisiete, fue interpuesto el recurso de revisión ante el INFOEM al considerar que el PRI respondió de manera incompleta a la solicitud de información, el cual fue registrado con el número de expediente 02516/INFOEM/IP/RR/2017.
- 4. Resolución del recurso de revisión.** En data de trece de diciembre de dos mil diecisiete, el Pleno del INFOEM resolvió dicho recurso de revisión ordenando al PRI atendiera la solicitud de información requerida y se entregará vía SAIMEX, los



documentos con la información solicitada.

Los puntos resolutivos del mencionado recurso se hicieron consistir en:

*"PRIMERO. Resultan fundadas las razones o motivos de inconformidad hechos valer por la parte recurrente; por lo que, se **modifica** la respuesta entregada por el Sujeto Obligado.*

*SEGUNDO. Se **ordena** al Partido Revolucionario Institucional, atienda la solicitud de información 00205/PRI/IP/2017, mediante la entrega vía SAIMEX, en términos del Considerando TERCERO de esta resolución, en versión pública de ser procedente, respecto de la Fundación Colosio, A. C. Filial Estado de México, lo siguiente:*

- Los documentos donde consten o se puedan advertir sus actividades realizadas, durante el periodo comprendido del tres de abril al treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete.

Respecto de los documentos que se ordena su entrega en versión pública, deberá emitir el Acuerdo del Comité de Transparencia, en términos del Considerando CUARTO y deberá ponerlo a disposición de la parte recurrente.

TERCERO. NOTIFÍQUESE al Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, para que en los términos previstos en los artículos 186 último párrafo y 189, párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; dé cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de diez días hábiles, e informe a este Instituto en un plazo de tres días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente resolución tal y como lo disponen los artículos 198 y 199 de la citada ley.

CUARTO. NOTIFÍQUESE a la parte recurrente la presente resolución; y hágasele de su conocimiento, que de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios podrá impugnar la presente resolución, vía Juicio de Amparo en los términos de las leyes aplicables."

5. Cumplimiento parcial del recurso de revisión. En fecha once de enero de dos mil dieciocho, el PRI dio cumplimiento parcial a la resolución del recurso de revisión con número de expediente 02516/INFOEM/IP/RR/2017.

6. Acuerdo de incumplimiento de resolución del recurso de revisión. En fecha veinticinco de abril, mediante acuerdo A/02516/2017, la Contraloría Interna y Órgano de Control y Vigilancia del INFOEM, determinó el incumplimiento al resolutive Segundo de la Resolución del Recurso de Revisión 02516/INFOEM/IP/RR/2017.

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MÉXICO

7. **Vista al IEEM.** El ocho de agosto, fue recibido en la Oficialía de Partes del IEEM, el oficio número INFOEM/CI-OCV/0600/2019, firmado por el Contralor Interno y Titular del Órgano de Control y Vigilancia del INFOEM, con el que dio vista al IEEM con el Acuerdo instrumentado por la Contraloría Interna y Órgano de Control y Vigilancia del INFOEM, por el incumplimiento del PRI a la resolución 02516/INFOEM/IP/RR/2017.

II. ACTUACIONES DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO

1. **Acuerdo de radicación, admisión y emplazamiento.** El doce de agosto, el Secretario Ejecutivo ordenó integrar el expediente respectivo y registrarlo con la clave PSO/EDOMEX/INFOEM/PRI/022/2019/08.

De igual manera, se admitió a trámite la vista presentada por el INFOEM, asimismo se ordenó emplazar y correr traslado al PRI.

2. **Contestación a la denuncia.** En fecha diecinueve de agosto, el representante propietario del PRI ante el Consejo General, presentó ante la Oficialía de Partes de dicho instituto, escrito mediante el cual dio contestación a los hechos que se le imputaron.

3. **Admisión y desahogo de las pruebas.** Mediante acuerdo de fecha veintiuno de agosto, el Secretario Ejecutivo admitió y desahogó las pruebas presentadas por el INFOEM; y determinó poner el expediente a la vista del denunciado para que en un plazo de cinco días, manifestara lo que a su derecho conviniera.

Asimismo, en fecha treinta de agosto, fue recibido en la Oficialía de Partes del IEEM, el escrito signado por el representante propietario del PRI ante el Consejo General, a través del cual realizó sus manifestaciones.

4. **Remisión del expediente a este órgano jurisdiccional.** Por

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MÉXICO

acuerdo de fecha dos de septiembre, la autoridad sustanciadora ordenó remitir a este Tribunal Electoral del Estado de México, el expediente del PSO identificado con la clave PSO/EDOMEX/INFOEM/PRI/022/2019/08, para su resolución.

III. ACTUACIONES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO.

- 1. Registro y turno a ponencia.** Mediante acuerdo de fecha treinta de septiembre, dictado por el Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional, se ordenó el registro del asunto en el Libro de PSO, bajo el número de clave **PSO/21/2019**; de igual forma, en el mismo acto se turnó el expediente a la ponencia a su cargo, a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
- 2. Radicación.** En cumplimiento a lo establecido por el artículo 485, párrafo cuarto, fracción I del CEEM, en data uno de octubre, el Magistrado Presidente, ponente en el presente asunto, dictó auto mediante el cual radicó el PSO.
- 3. Cierre de instrucción.** En su oportunidad, el Magistrado Presidente ponente en el presente asunto, cerró la instrucción, mediante auto de fecha uno de octubre, en virtud de que el expediente se encontraba debidamente integrado y al no haber más diligencias pendientes por desahogar, ordenó formular el proyecto de resolución que en derecho corresponda.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de México tiene jurisdicción y competencia para resolver el presente Procedimiento Sancionador Ordinario sometido a su conocimiento conforme a lo dispuesto en los artículos 116 fracción IV, incisos l) y o) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1º, 23, fracción VII, 29 y 225 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MÉXICO

México y Municipios; 383, 390, fracción XIV, 458 y 481 del CEEM; 2° y 19 fracciones III y XXXVII del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de México, toda vez que, se trata de un procedimiento sancionador ordinario, iniciado con motivo de la vista realizada al IEEM por el INFOEM, derivado del incumplimiento en materia de transparencia y acceso a la información pública de un partido político.

SEGUNDO. Requisitos de la queja. A este respecto cabe mencionar, que el denunciado PRI, en su contestación a la queja instaurada en su contra, hace valer la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 475, párrafo primero, fracción I del CEEM, relativa a que la denuncia sea evidentemente frívola.

Sin embargo, este órgano jurisdiccional considera que dicha causal de improcedencia debe desestimarse, en atención a que la citada disposición normativa se actualiza cuando un medio de impugnación carece de sustancia, que se basa en un planteamiento inadecuado, ya sea porque el impugnante alegue cuestiones puramente subjetivas, o bien, porque se trata de pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran amparadas por el derecho. Criterio que se encuentra contenido en la Jurisprudencia 33/20022, cuyo rubro es el siguiente: **"FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE"**.

En las relatadas circunstancias, de la vista dada por el Contralor Interno y Titular del Órgano de Control y Vigilancia del INFOEM, al IEEM, con el acuerdo A/02516/2017 en el que determinó el incumplimiento del PRI a la resolución 02516/INFOEM/IP/RR/2017, se advierten hechos que desde su perspectiva vulneran el derecho de acceso a la información pública que generen y posean los partidos políticos, en los términos y plazos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

² Emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consultable a fojas 364 a 366 de la Compilación 1997-2013, "Jurisprudencia y tesis en materia electoral", Jurisprudencia, Volumen 1.

México y Municipios; asimismo, se ofrecen las probanzas que consideran pertinentes para acreditar los hechos controvertidos; por lo tanto, se concluye que no es dable declarar la improcedencia de la denuncia que ahora se resuelve, con base en la frivolidad alegada.

En todo caso, la eficacia de esos argumentos para alcanzar los extremos pretendidos será motivo de análisis en el fondo del asunto puesto a consideración de esta instancia jurisdiccional.

Ahora bien, este Tribunal verificó que la autoridad instructora haya dado cumplimiento al análisis del escrito de queja, examinando que el mismo reuniera los requisitos de procedencia previstos en 477 del CEEM, y toda vez que no se ha advertido la existencia de deficiencias u omisiones en la tramitación de la denuncia y determinando que se cumple con todos los requisitos de procedencia, lo conducente es conocer de los hechos, en relación con las pruebas aportadas por las partes, a efecto de estar en aptitud de dilucidar, si el denunciado, incurrió en violaciones a la normatividad electoral y en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Por lo anterior, se procede a realizar el estudio y resolución de los hechos denunciados.

TERCERO. Hechos denunciados y contestación de la denuncia.

Del análisis realizado al oficio que dio origen al PSO que nos ocupa, y que fue formulado por el INFOEM, mediante la vista dada al IEEM, se advierte que los hechos denunciados consisten, sustancialmente, en:

- Que mediante la solicitud de información número 00205/PRI/IP/2017, fue solicitada vía electrónica por el SAIMEX, al PRI, que proporcionara información relativa a la Fundación Colosio A. C. de dicho partido, sin que la petición de información fuera atendida de manera satisfactoria.
- Que derivado de lo anterior, el ciudadano solicitante interpuso el recurso de revisión correspondiente, al considerar que el sujeto



obligado realizó una respuesta incompleta ante la negativa de entregar lo relativo a la bitácora o documento similar o análogo.

- Que mediante resolución de fecha trece de diciembre de dos mil diecisiete, emitida por el Pleno del INFOEM, se modificó la respuesta otorgada por el sujeto obligado a la solicitud de información número 00205/PRI/IP/2017, y se ordenó al PRI, atender la solicitud de información realizada y hacer entrega mediante la vía SAIMEX, de los documentos donde consten o se puedan advertir las actividades realizadas por la Fundación Colosio, A. C., filial Estado de México, durante el periodo comprendido del tres de abril al treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete.
- Que mediante acuerdo A/02516/2017 de fecha veinticinco de abril de dos mil diecisiete, la Contraloría Interna y Órgano de Control y Vigilancia del INFOEM, emitió el incumplimiento al resolutivo segundo de la resolución del recurso de revisión 02516/INFOEM/IP/RR/2017, por parte del sujeto obligado PRI.
- Que mediante oficio número INFOEM/CI-OCV/0600/2019, de fecha uno de agosto de dos mil diecinueve, el Contralor Interno y Titular del Órgano de Control y Vigilancia del INFOEM, dio vista al Consejero Presidente del IEEM con los Acuerdos instrumentados por la Contraloría Interna y Órgano de Control y Vigilancia de dicho Instituto de Transparencia, en los que se determinó el incumplimiento de los sujetos obligados a las resoluciones dictadas por el Pleno del INFOEM, entre los cuales se encuentra el incumplimiento que dio origen al presente PSO.

Por su parte, el PRI, al dar contestación a los hechos que dieron origen al Procedimiento Sancionador Ordinario que nos ocupa, y al desahogar la vista ordenada por la autoridad sustanciadora sustancialmente señaló lo siguiente:

- Que en el presente procedimiento se actualiza la frivolidad en términos del artículo 475, fracción I del CEEM, en virtud de que a decir del denunciado la solicitud fue atendida en tiempo y forma con la información que contaba en ese momento.

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MEXICO

- Que niega el incumplimiento a la resolución del trece de diciembre de dos mil diecisiete, dictada por el INFOEM en el recurso de revisión 02516/INFOEM/IP/RR/2017, en el que se ordenó atender la solicitud de información 00205/PRI/IP/2017, mediante la entrega vía SAIMEX, lo cual en concepto del denunciado fue cumplido a cabalidad, toda vez que el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, solicitó al Presidente de la Fundación Colosio la información ordenada en la mencionada resolución, asimismo el diez de enero del dos mil dieciocho, la referida fundación dio contestación a lo solicitado, documentación que fue agregada a SAIMEX; posteriormente que el once de enero de dos mil dieciocho, integró en SAIMEX el documento denominado "*Acatamiento del RR 02516-INFOEM-RR-2017.pdf*", en donde señaló que giro oficio a la fundación de mérito, al ser la única facultada para conocer de la información solicitada, lo cual fue informado al pleno del INFOEM; por lo anterior el sujeto obligado considera que acató en tiempo y forma lo ordenado por el instituto de transparencia referido.
- Que de los archivos del sistema SAIMEX consta que la resolución del recurso de revisión 02516/INFOEM/IP/RR/2017, fue acatada por el sujeto obligado con la contestación emitida por la Fundación Colosio A. C. filial Estado de México mediante el oficio FCEM/002/2018, del cual se advierte que dicha fundación realiza reuniones con la finalidad de difundir la ideología del denunciado, sin que tenga que generar bitácora y/o documentos similares o análogos de las actividades realizadas, ya que el INFOEM no funda ni motiva la determinación que tendría el sujeto obligado de generar la documentación solicitada, pues el artículo 224, fracción II de los Estatutos del PRI, no existe la presunción ni la obligación de generar, bitácora y/o documentos similares análogos de las actividades realizadas tratándose de reuniones para la difusión de la ideología, el ideario del PRI e impulso de la cultura política democrática.
- Que "*Ad impossibilia nemo tenetur*" nadie está obligado a realizar lo imposible, lo que el sujeto obligado señala que adquiere relevancia en el asunto puesto que es materialmente



TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MÉXICO

imposible que el PRI genere información la cual no está obligado a elaborar, aunado a que el artículo 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México, no le impone a la Fundación Colosio A. C. filial Estado de México, la obligación de contar con la información solicitada, de ahí que con el estricto cumplimiento al principio de legalidad consagrado en el artículo 16 de la constitución federal no fue necesario que el Comité de Transparencia emitiera una resolución que confirmara la inexistencia de la información.

- Que de las documentales consistentes en el acuerdo del fecha veinticinco de abril, recaído al incumplimiento de la resolución del recurso de revisión 02516/INFOEM/IP/RR/2017; la impresión en blanco y negro de las fojas 29, 30, 31 y 32 de la referida resolución, del detalle de seguimiento de solicitudes del SAIMEX, en concordancia con la instrumental de actuaciones se advierte que se dio contestación a la solicitud de información, que se dio cabal cumplimiento al numeral 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México, toda vez que refiere no estar obligado a cumplir con lo imposible.
- Que de los medios de prueba que obran en el expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, generan la convicción de que el PRI, ajustó su actuación al marco de la legalidad que rige la materia, dando cumplimiento a lo ordenado en la resolución del recurso de revisión 02516/INFOEM/IP/RR/2017.

CUARTO. Fijación de la materia del procedimiento. Una vez señalados los hechos que constituyen la materia del PSO que nos ocupa, este Tribunal advierte que la controversia se constriñe en determinar si el PRI incumplió o no su deber de garantizar a las personas el acceso a la información que posea, administre o genere, en los términos en la normatividad aplicable en materia de transparencia.

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MÉXICO

Una vez señalados los hechos que constituyen la materia de la vista formulada por el INFOEM, así como los razonamientos formulados por la parte denunciada, se concluye que el punto de contienda sobre el que versará el estudio del presente PSO, consiste en dilucidar si el PRI incurrió en violaciones a la normativa electoral, derivado del incumplimiento del resolución dictada en el recurso de revisión 02516/INFOEM/IP/RR/2017 relacionado con la obligación que tiene dicho instituto político de otorgar el derecho de acceso a la información pública que genera y posee, en los términos y plazos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

QUINTO. Metodología de Estudio. Por razón de método y derivado de los hechos denunciados, se procederá al estudio de los hechos denunciados en el siguiente orden:

- A. Determinar si los hechos motivo de la queja se encuentran acreditados.
- B. En caso de encontrarse demostrados, se analizará si los mismos constituyen infracciones a la normatividad electoral.
- C. Si dichos hechos llegasen a constituir una infracción o infracciones a la normatividad electoral, se estudiará si se encuentra acreditada la responsabilidad del probable infractor.
- D. En caso de que se acredite la responsabilidad, se hará la calificación de la falta e individualización de la sanción para el o los sujetos que resulten responsables.

SEXTO. Pronunciamiento de fondo. En primer término resulta oportuno precisar que, este órgano resolutor se adhiere al criterio de que el PSO al encontrarse configurado dentro de la normativa electoral estatal, se compone de etapas diferenciadas por dos rasgos: su naturaleza y el órgano que las atiende.

Acorde con lo anterior, en un primer momento al IEEM, le correspondió el trámite, en su caso, la adopción de medidas cautelares y la instrucción, en tanto que a este Tribunal Electoral local, le compete resolver el procedimiento sancionador ordinario,



para lo cual debe analizar las pruebas que obran en el sumario y valorarlas en concordancia con los argumentos vertidos por las partes, y así, determinar sobre la existencia de la violación objeto de la denuncia y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes.

En tal sentido, y a efecto de que este Tribunal se encuentre en condiciones de determinar la legalidad o ilegalidad de los hechos denunciados, en primer lugar se debe verificar la existencia de éstos, lo cual se realizará tomando como base las etapas de ofrecimiento, objeción, admisión, desahogo y valoración tanto individual como en conjunto de las pruebas aportadas por las partes, así como de las acercadas por la autoridad instructora, y, en su caso, las recabadas por este Tribunal local.

Es oportuno precisar que desde el surgimiento de los procedimientos sancionadores, cuya vertiente obedece a una construcción judicial, su naturaleza se configura en procedimientos sumarios que por los momentos y supuestos en que son procedentes, se caracterizan por la brevedad de sus plazos atendiendo a los principios y valores que buscan salvaguardar dentro de los procesos electorales.³

Conforme a la metodología señalada en el considerando anterior, se procede a determinar lo siguiente:

A) EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE LOS HECHOS DE LA QUEJA.

Acorde a lo anterior, el análisis de la existencia o inexistencia de los hechos se realizará, como ya se dijo, de conformidad con las pruebas admitidas y desahogadas que integran el expediente, las cuales se valorarán en su conjunto atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, así como a los principios rectores de la función electoral.

Así, este órgano jurisdiccional verificará la existencia de los hechos denunciados tomando como base las etapas de ofrecimiento, objeción, admisión, desahogo, y valoración tanto individual como en

³ Criterio asumido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el Recurso SUP-RAP-17/2006.

conjunto de las pruebas aportadas por las partes, así como de las acercadas por la autoridad instructora en vía de diligencias para mejor proveer y, en su caso, las recabadas por este Tribunal Electoral.

Por tanto, este órgano jurisdiccional se abocará a la resolución del procedimiento sancionador ordinario que nos ocupa con el material probatorio que obra en autos.

Por otra parte, acorde con la argumentación recogida en el criterio jurisprudencial 19/2008, de rubro: "ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL,"⁴ en esta etapa de valoración se observará uno de los principios fundamentales que regula la actividad probatoria que tiene como finalidad esencial el esclarecimiento de la verdad legal, y que es el de adquisición procesal, por lo que en su momento, la valoración de las pruebas que obran en autos habrá de verificarse en razón de este principio en relación con todas las partes involucradas dentro del presente PSO, y no sólo en función a las pretensiones de los oferentes.

De igual forma se tendrá presente que en términos del artículo 441, del CEEM, sólo son objeto de prueba los hechos controvertidos; por lo que no lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos por las partes en el procedimiento que nos ocupa.

De esta manera, para el caso, obran en el expediente los siguientes medios de convicción:

A. De las aportadas por el INFOEM.

- a. **Documental pública.** Consistente en el original del acuerdo de fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve, recaído al incumplimiento de la Resolución del Recurso de Revisión 02516/INFOEM/IP/RR/2017, por parte del sujeto obligado PRI.⁵

⁴ Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 113 a 120.

⁵ Visible en fojas de la 8 a la 13.

- b. **Documental pública.** Consistente en la impresión del Detalle de Seguimiento de Solicitudes de SAIMEX, de la solicitud con número de folio 00205/PRI/IP/2017.
- c. **Documental pública.** Consistente en la impresión de la resolución al Recurso de Revisión 02516/INFOEM/IP/RR/2017, de fecha trece de diciembre de dos mil diecisiete, emitida por el Pleno del INFOEM.

B. De las pruebas aportadas por el PRI.

- a. **Documental pública.** Consistente en la copia certificada del escrito de fecha diez de diciembre de dos mil dieciocho, mediante el cual la Presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México, nombra a Ramón Tonatiuh Medina Meza como representante propietario del citado partido político, ante el Consejo General.⁶
- b. **La presuncional legal y humana.**
- c. **La instrumental de actuaciones.**

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MÉXICO

Por lo que respecta a la pruebas documentales públicas reseñadas, en términos de los artículos 435, fracción I, 436, fracción I, inciso b) y c), así como 437, párrafo segundo del CEEM, tienen pleno valor probatorio, al tratarse de documentales públicas expedidas por autoridades en el ejercicio de sus funciones.

En cuanto a las pruebas documentales privadas, así como la presuncional e instrumental, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 435, fracciones II, III, VI y VII, 436, fracciones II, III y V, y 437, párrafo tercero del CEEM, sólo harán prueba plena cuando a juicio de este Tribunal, administradas con los demás elementos que obren en el expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.

Así las cosas, de un análisis y valoración integral de las pruebas mencionadas, conforme a lo manifestado y aceptado, **este Tribunal tiene por acreditado el hecho motivo del presente**

⁶ Consultable en la foja 21.

procedimiento, consistente en el incumpliendo por parte del PRI, a lo ordenado en el Resolutivo Segundo de la resolución recaída al expediente 02516/INFOEM/IP/RR/2017, emitida por el Pleno del INFOEM.

Esto es así, toda vez que en el oficio número INFOEM/CI-OCV/0600/2019 de fecha uno de agosto, signado por el Contralor Interno y Titular del Órgano de Control y Vigilancia del INFOEM, por medio del cual comunica que la Contraloría Interna y Órgano de Control y Vigilancia de dicho Instituto de Transparencia, instrumentó el acuerdo A/02516/2017, en el que se determinó el incumplimiento del sujeto obligado PRI, a la resolución dictada por el Pleno del INFOEM.

Así pues, de las constancias procesales que integran el presente asunto se advierte que, no obstante lo manifestado por el probable infractor, en su escrito de contestación a los hechos que originaron la vista correspondiente, del acuerdo A/02516/2017 de fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve,⁷ se advierte que el PRI, incumplió el Resolutivo Segundo de la Resolución del Recurso de Revisión 02516/INFOEM/IP/RR/2017.⁸ Lo anterior como se advierte de la información de los medios probatorios que a continuación se reseñan:



TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MÉXICO

Solicitud de información formulada al PRI mediante SAIMEX, como lo señala el INFOEM en el antecedente primero de la resolución 02516/INFOEM/IP/RR/2017	<i>"Solicito la descripción de todas las acciones que ejecuta la Fundación colosio AC. Cual es el marco jurídico que regula su actuación. El registro del listado de todos sus integrantes. La bitácora y/o documentos similares o análogos de las actividades realizadas por la Fundación durante el periodo de la campaña electoral 2017 para gobernador o a la par del tiempo que durarla misma" (Sic)</i>
Respuesta a la solicitud de información en los términos consignados en el antecedente segundo de la resolución	<i>"En atención a su solicitud, la Unidad de Transparencia del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, giro oficio a la instancia partidista que cuenta con atribuciones</i>

⁷ Documento que consta en original en fojas 8 a la 13, y que en términos de los artículos 435, fracción I, 436, fracción I, inciso c), así como 437, párrafo segundo del CEEM, tienen pleno valor probatorio.

⁸ Resolución emitida por el Pleno del INFOEM el trece de diciembre de dos mil diecinueve, en el expediente 02516/INFOEM/IP/RR/2017, consultable en la dirección electrónica <https://www.infoem.org.mx/doc/versionesPublicas/2017/e4c0dd42c72d2e849c08f50db88b1365.pdf>, misma que se invoca como un hecho notorio en términos del artículo 441 del CEEM y de conformidad con conformidad con la jurisprudencia XX-2º. J/24, de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR", así como la tesis I.3º. C.35 K (10a.), de rubro: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL"; jurisprudencia y tesis consultables en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, enero de 2009, página 2470; y, Décima Época, Libro XXVI, Tomo 2, noviembre de 2013, página 1373, respectivamente.

<p>02516/INFOEM/PI/RR/2017</p>	<p>estatutarias para conocer y registrar los datos que pide, misma que fue recibida en la Fundación Colosio A. C. Filial Estado de México, oficio que como ANEXO UNO me permito adjuntar a esta respuesta. Atendiendo el requerimiento de información, la Fundación en mención, remitió la información solicitada por vía oficio, documento que como ANEXO DOS me permito acompañar a la respuesta a su solicitud de información." (Sic)</p>
<p>Argumentos para la interposición del Recurso de Revisión, en los términos señalados en el antecedente tercero de la resolución 02516/INFOEM/PI/RR/2017</p>	<p>"Respuesta incompleta por la negativa a entregarme la relativo a la bitácora o documento similar o análogo." (Sic)</p> <p>"Esto porque debió generar la documentación de sus actividades durante los meses que coincidentemente fueron los meses en que hubo campañas para renovar al titular del poder ejecutivo estatal, ya que como lo pedo en mi solicitud "o a la par en los meses en que hubo campaña electoral para gobernador"" (Sic)</p>
<p>Recurso de Revisión 02516/INFOEM/PI/RR/2017</p>	<p>SEGUNDO. Se ordena al Partido Revolucionario Institucional, atienda la solicitud de información 00205/PRI/IP/2017, mediante la entrega vía SAIMEX, en términos del Considerando TERCERO de esta resolución en versión pública de ser procedente, respecto de la Fundación Colosio, A. C. Filial Estado de México, lo siguiente:</p> <p>- Los documentos donde consten o se puedan advertir sus actividades realizadas, durante el periodo comprendido del tres de abril al treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete.</p> <p>Respecto de los documentos que se ordena su entrega en versión pública, deberá emitir el Acuerdo del Comité de Transparencia, en términos del Considerando CUARTO y deberá ponerlo a disposición de la parte recurrente.</p>
<p>Revisión de cumplimiento: acuerdo A/00850/2017 de fecha seis de noviembre de dos mil diecisiete, emitido por la Contraloría Interna y Órgano de Control y Vigilancia del INFOEM</p>	<p>B. En el caso concreto se constriñe a determinar si el Sujeto Obligado implicado, dio cumplimiento a la Resolución del Recurso de Revisión que nos ocupa, en tiempo y forma.</p> <p>1. Conforme al resolutive Segundo el Pleno ordenó lo siguiente:</p> <p>"SEGUNDO. Se ORDENA al Partido Revolucionario Institucional, atienda la solicitud de información 00205/PRI/IP/2017, mediante la entrega vía SAIMEX, en términos del Considerando TERCERO de esta resolución, en versión pública de ser procedente, respecto de la Fundación Colosio, A. C. Filial Estado de México, lo siguiente:</p> <p>- Los documentos donde conste o se puedan advertir sus actividades realizadas, durante el periodo comprendido del tres de abril al treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete.</p> <p>Respecto de los documentos que se ordena su entrega en versión pública, deberá emitir el Acuerdo del Comité de Transparencia, en términos del Considerando CUARTO y deberá ponerlo a disposición de la parte recurrente."</p> <p>2. Por su parte el Sujeto Obligado Partido Revolucionario Institucional entregó la siguiente información:</p> <p>I. Se tiene al Sujeto Obligado entregando un archivo de nombre "ANEXO UNO.pdf" dentro del cual se aprecia un oficio girado por el Titular de la Unidad de Transparencia al Presidente de la Fundación Colosio Filial Estado de México en el que se le requirió la entrega de la información prevista en la Resolución del Recurso de Revisión de mérito.</p> <p>II. Se tiene al Sujeto Obligado entregando un archivo de nombre "Acatamiento del RR 02516-INFOEM-RR-2017.pdf" dentro del cual se aprecia un documento suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia dirigido a la Recurrente en el que refiere estar dando atención a lo requerido por el Pleno del Instituto.</p> <p>III. Se tiene al Sujeto Obligado entregando un archivo de nombre "ANEXO DOS.pdf" dentro del cual se aprecia un oficio suscrito por el Presidente de la Fundación Colosio Filial Estado de México dirigido al Titular de la Unidad de Transparencia mediante el cual da contestación al Requerimiento de la información respecto de la atención del presente asunto, apreciándose que en dicho escrito se manifiesta que no se cuenta con documentos donde obre la información solicitada.</p> <p>IV. Se tiene al Sujeto Obligado entregando un archivo de nombre "Constestacio al RR 02516-INFOEM-RR-2017 pdf" dentro del cual se aprecia un oficio suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia dirigido al Pleno de este Instituto en el que manifiesta haber dado cumplimiento a lo</p>



	<p>requerido en la Resolución del Recurso de Revisión mediante la entrega del soporte documental descrito previamente.</p> <p>3. Derivado de la verificación realizada a las constancias que integran el expediente electrónico, se llega a la conclusión de que la información es incompleta, esto en atención a las siguientes precisiones:</p> <p>I. Con respecto a lo ordenado por el Pleno del Instituto en la Resolución del Recurso de Revisión de mérito, se aprecia que el Sujeto Obligado no hace entrega de la información solicitada argumentando que no se cuenta con documentación al respecto de las actividades realizadas entre el 03 de abril y el 31 de mayo de 2017, sin embargo el mismo Sujeto Obligado manifiesta que si se realizaron actividades relacionadas con las funciones de la Fundación Colosia, A.C. Filial Estado de México, por lo que conforme al análisis realizado por el Pleno del Instituto en el Considerando TERCERO de la Resolución de mérito, se debió generar información relativa a bitácoras o documentos similares en los que se describan las actividades que se realizaron.</p> <p>4. Por cuanto hace a las manifestaciones realizadas por la Recurrente, conforme al artículo 199, último párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, no se aprecia que se planteen causas específicas de inconformidad respecto al cumplimiento o incumplimiento por parte del Sujeto Obligado.</p> <p>En consideración a las precisiones y razonamientos precedentes se determina el INCUMPLIMIENTO por parte del Sujeto Obligado Partido Revolucionario Institucional.</p> <p>Por lo expuesto y fundado se ACUERDA</p> <p>PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 200, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se emite el incumplimiento a la Resolutivo Segundo de la Resolución del Recurso de Revisión 02516/INFOEM/IP/RR/2017, por parte del Sujeto Obligado Partido Revolucionario Institucional.</p> <p>SEGUNDO.- Notifíquese este Acuerdo a la Recurrente, a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), para los efectos legales a que haya lugar.</p> <p>TERCERO.- Notifíquese el presente proveído al Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), para los efectos legales a que haya lugar.</p> <p>CUARTO.- Remítanse las constancias y documentales del presente expediente a la instancia competente a efecto de que continúe con la sustanciación de las diligencias que se consideren necesarias para lo conducente.</p>
--	--

En razón a lo anterior, una vez que se acreditó la existencia del incumplimiento del denunciado en materia de transparencia y acceso a la información, lo procedente es continuar con el análisis de la *litis* de conformidad con la metodología planteada en el considerando quinto de esta sentencia.

B) EN CASO DE ENCONTRARSE DEMOSTRADOS LOS HECHOS DENUNCIADOS, SE ANALIZARÁ SI LOS MISMOS CONSTITUYEN INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL.

Una vez acreditados los hechos anteriormente descritos, este órgano jurisdiccional considera que la conducta asumida por el PRI, es constitutiva de violación al marco jurídico electoral, por

la violación a las disposiciones contenidas en los artículos 443, párrafo 1, incisos a) y k), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 25, párrafo 1, inciso t); 27, 28, numerales 1, 2 y 3 de la Ley General de Partidos Políticos; 61 y 460, primer párrafo fracción VIII del CEEM; y 7° y 23 párrafo primero fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, relacionados con su obligación de atender en los plazos y términos, el derecho de acceso a la información pública.

Para sustentar la premisa referida, resulta oportuno precisar el marco jurídico, a partir del cual, encuentra apoyo la hipótesis motivo de análisis de los Procedimientos Sancionadores Electorales puestos a consideración de este órgano jurisdiccional local, a partir de lo siguiente:

El artículo 6º, apartado A, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, **partidos políticos**, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijan las leyes, y en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.

El diverso 116, fracción VIII Constitucional establece que las constituciones locales establecerán organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados, responsables de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.

De las disposiciones constitucionales mencionadas, se advierte que el derecho fundamental de acceso a la información pública, implica el conocimiento de los particulares de información plural y oportuna



TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MÉXICO

que se contenga en los documentos que posean, entre otros, los partidos políticos; incluso se impone la obligación de preservar sus documentos en archivos actualizados.

Por tanto, para que los Sujetos Obligados hagan efectivo el derecho de acceso a la información pública que generen, administren o posean, deben poner a disposición de los particulares los documentos en los que conste el ejercicio de sus atribuciones legales o que por cualquier circunstancia obre en sus archivos.

A partir de lo anterior, el artículo 443 párrafo primero, incisos a) y k) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que constituyen infracciones de los partidos políticos, el incumplimiento a la propia Ley General de Partidos Políticos, y lo relativo a sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información.

Por lo que, son obligaciones de los partidos políticos aquellas que en materia de transparencia y acceso a su información se establecen por la ley, para lo cual, toda persona tiene derecho a acceder a la información de aquellos de conformidad con las reglas establecidas por los artículos 27 y 28, numerales 1, 2 y 3, de la Ley General de Partidos Políticos.

En este orden de ideas, los partidos políticos son corresponsables de respetar y preservar los derechos fundamentales de los ciudadanos, no sólo los derechos político-electorales como el de asociación, afiliación, de votar o ser votado, sino además, el derecho a la información, mismo que se traduce en la acción de poner a disposición de quien lo requiera, los documentos que soportan las actividades que realizan y así cumplir con el fin de promover la vida democrática.

Lo anterior es así, debido a que la promoción de la democracia no se basa en la retórica o en la participación en los procesos electorales. La democracia, como lo señala nuestra Carta Fundamental en el artículo 3º fracción II inciso a), debe ser considerada no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MÉXICO

sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Y una de las maneras en que los partidos políticos pueden contribuir al fortalecimiento del estado democrático de derecho es creando ciudadanos informados y mejor capacitados para la toma de decisiones. De este modo, el hecho de que los ciudadanos cuenten con la información que generan los partidos políticos, potencializa el ejercicio de los derechos político-electorales.

En el mismo sentido, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en su artículo 5°, párrafos vigésimo y vigésimo primero, fracción VIII, establece que la información estará garantizada por el Estado, por lo que para el ejercicio del derecho de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, los sujetos obligados deberán transparentar sus acciones, con el propósito de que la información sea oportuna, clara, eficaz veraz y de fácil acceso. En razón de tal derecho, se contará con un organismo autónomo, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de transparencia, acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.

Por su parte, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en los artículos 1°, 7° y 23 párrafo primero, fracción VII, esencialmente aluden a reconocer que dicha disposición es de orden público e interés general, además reglamentaria de los párrafos décimo séptimo, décimo octavo y décimo noveno del artículo 5° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Así, en la entidad se garantizará el efectivo acceso de toda persona a la información en posesión de cualquier entidad, entre otros, de los partidos políticos, siendo sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder en el ámbito del Estado de México y sus municipios.

En este contexto, es evidente la responsabilidad por infracciones cometidas a la ley electoral por los partidos políticos, respecto de las



obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública. Pues es la propia legislación, la que precisa que se debe garantizar el derecho de las personas de acceder a la información de los institutos políticos, de forma directa, conforme a los procedimientos y plazos establecidos por las leyes general y estatal de transparencia.

Aunado a que, se prevé como causa de sanción a los sujetos obligados, la falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados en la normatividad aplicable y actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de las solicitudes en materia de acceso a la información. Particularmente, ante incumplimientos en materia de transparencia y acceso a la información por parte de los partidos políticos, el Instituto u organismo garante competente dará vista, según corresponda, a la autoridad electoral, para que resuelvan lo conducente, sin perjuicio de las sanciones establecidas para los partidos políticos en las leyes aplicables.

Así las cosas, a consideración de esta autoridad jurisdiccional, el partido político denunciado actualizó los supuestos de infracción precisado en el marco jurídico, habida cuenta de que como sujeto obligado a transparentar y permitir el acceso a la información pública que obra en su poder, incurrió no sólo en la falta de atención completa a la solicitud de información; sino además, en el incumplimiento de las resoluciones del órgano garante, dentro de los plazos señalados en la normatividad de transparencia.

En este sentido, es evidente que el PRI, en modo alguno, ajustó su conducta a las obligaciones previstas tanto en la legislación electoral, como en aquellas relacionadas con la materia de transparencia y acceso a la información pública a las cuales se encuentra compelido a acatar, en términos de lo dispuesto en el artículo 6°, apartado A, Base I y VII, de la Constitución federal, ya que fue el Pleno del INFOEM el que al resolver determinó la entrega incompleta de la información solicitada.

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MÉXICO

En efecto, el Sujeto Obligado estaba impuesto a exponer ante el INFOEM, argumentos lógicos y jurídicos para justificar el hecho que le impedía formal y materialmente poner a disposición la información que le fue solicitada, dentro de los plazos previstos legalmente para ello, es decir, argumentar y, sobre todo, demostrar suficientemente que existían motivos insuperables que sustentaban la supuesta inexistencia de la documentación solicitada y que hacían imposible el cumplimiento de una obligación legal relacionada con el derecho de acceso a la información tutelada en favor de un ciudadano.

Por esta razón, la simple manifestación de manera genérica de actividades realizadas sin el sustento documental de las mismas, no resultan admisibles para dejar de cumplir con la obligación de dar acceso a la información pública a un ciudadano que la solicite, toda vez que de ser así, *es decir, sujetar este derecho fundamental a situaciones fácticas aducidas por los sujetos obligados*, implicaría una merma grave en su ejercicio, en la medida que su cumplimiento estaría sujeto a situaciones justificadas o no en la voluntad y discrecionalidad de los sujetos obligados, lo cual resulta jurídicamente imposible, en la medida que ello trastocaría el eficaz ejercicio de la garantía constitucional otorgada a toda persona, de estar informada, más aún cuando la información es considerada como pública.

Apoya la anterior conclusión, la tesis de Jurisprudencia 13/2012, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro "DERECHO A LA INFORMACIÓN. SÓLO LAS CAUSAS DE FUERZA MAYOR JUSTIFICADAS, EXIMEN A LA RESPONSABLE DE SU OBSERVANCIA."

Como consecuencia de lo razonado para este órgano jurisdiccional electoral local, resulta claro el incumplimiento del PRI, dentro de los plazos legales otorgados para ello, a lo resuelto por el Pleno del INFOEM, en el Recurso de Revisión 02516/INFOEM/IP/RR/2017, y a partir de ello, la conculcación del marco jurídico en materia electoral, relacionado con el derecho de acceso a la información pública. Por tanto resulta válido concluir que los hechos imputados al denunciado

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MÉXICO

constituyen infracción a la normatividad electoral y en materia de transparencia y acceso a la información pública, por lo que lo procedente es continuar con la metodología planteada.

C. SI DICHOS HECHOS LLEGASEN A CONSTITUIR UNA INFRACCIÓN A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, SE ESTUDIARÁ SI SE ENCUENTRA ACREDITADA LA RESPONSABILIDAD DEL DENUNCIADO.

Continuando con la metodología indicada en el considerando sexto de esta sentencia, y en virtud de que, se acreditó la omisión de otorgar información pública por parte del PRI; lo cual, viola los artículos 443, párrafo 1, incisos a) y k) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 25 párrafo 1, inciso t), 27, 28, numerales 1 y 2 de la Ley General de Partidos Políticos; 61 del CEEM; 7 y 23, párrafo primero, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, a continuación se determinará la responsabilidad del partido denunciado.



TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MÉXICO

Máxime que la configuración de dichas prerrogativas a favor de los ciudadanos se establece en el artículo 6° de la Constitución Federal, de ahí que, el bien jurídico tutelado por esta cláusula constitucional, es el derecho a la información.

Siendo que los partidos políticos, son reconocidos constitucionalmente en el artículo 6°, apartado A, fracción I, como sujetos obligados directos en materia de transparencia y acceso a la información pública, y en el artículo 41 como entidades de interés público, en razón de que reciben recursos por el Estado, son artífices en la vida democrática del país y del interior de sus filas, se eligen mediante el voto a quienes accederán a cargos públicos de representación popular, y por esa razón se actualiza en ellos el interés público.

Así, como Sujetos Obligados en materia de transparencia y acceso a la información, deben responder sustancialmente y de manera oportuna a las solicitudes que en ese ámbito les sean formuladas.

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha precisado que los partidos políticos, como entidades de interés público, son copartícipes en la obligación que tiene el Estado de garantizar el derecho a la información, atento a lo establecido en la Jurisprudencia 13/2011 de rubro "DERECHO A LA INFORMACIÓN. LOS PARTIDOS POLÍTICOS ESTÁN DIRECTAMENTE OBLIGADOS A RESPETARLO."

Por tanto, la responsabilidad en que ha incurrido el denunciado, tiene como sustento el estudio adminiculado y conjunto del acervo probatorio que integra este expediente, al resultar de entidad probatoria suficiente para acreditar las circunstancias en ella referidas, además que la autenticidad de los datos ahí descritos no se encuentra controvertida, ni su eficacia probatoria disminuida por no existir indicio que le reste credibilidad.

Bajo este contexto, se considera que todos esos elementos son suficientes para acreditar la responsabilidad del PRI sobre el incumplimiento al derecho de acceso a la información pública.

D) CALIFICACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Continuando con la metodología planteada en el considerando sexto de esta sentencia, una vez que se tiene por acreditada la responsabilidad derivada de la conducta asumida por el PRI, al incumplir el deber de garantizar a las personas el acceso a la información pública; por lo que, lo procedente es tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma electoral, para el sujeto infractor, a efecto de calificar e individualizar la sanción correspondiente, misma que debe ser necesaria para disuadir la conducta infractora de la norma.

Para ello, en todo momento se estará a lo establecido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación⁹, en cuanto a la definición de los criterios y parámetros a seguir en la valoración de las conductas que resulten trasgresoras de la norma, así como de su trascendencia en el contexto en que acontecieron.

⁹ Al respecto véase el juicio SUP-RAP-142/2013.



En principio, se debe señalar que el Derecho Administrativo Sancionador Electoral, se identifica con las generalidades y los principios del *ius puniendi* desarrollados por el Derecho Penal, habida cuenta que consiste en la imputación a un partido político, de un hecho identificado y sancionado por las normas electorales; lo cual implica, entre otras cuestiones, que en la integración de cualquier Procedimiento Administrativo Sancionador Electoral, la autoridad al desplegar sus facultades investigadoras debe, entre otras cosas, evidenciar el tipo de conducta realizada por los responsables y su grado de participación, pues tales elementos son indispensables para poder imponer una debida sanción, a través de su ponderación para estar en aptitud de determinar la gravedad de la infracción y así graduar debidamente la sanción.

Así, una de las facultades de la autoridad jurisdiccional es la de reprimir conductas que vulneren el orden jurídico, para lograr el respeto de los principios constitucionales y legales en la materia electoral. Para ello, el juzgador debe hacer un ejercicio de ponderación a efecto que la determinación que en su caso se establezca, guarde parámetros efectivos y legales, tales como:

- Que se busque adecuación; es decir, considerar la gravedad de la infracción, las circunstancias en que ésta se cometió, así como las condiciones particulares del infractor.
- Que sea proporcional, lo cual implica tomar en cuenta para individualizar la sanción el grado de participación de cada implicado, la gravedad del hecho y las circunstancias de modo, tiempo y lugar.
- Eficacia: esto es, procurar la imposición de sanciones mínimas pero necesarias para asegurar la vigencia de los bienes jurídicos puestos en peligro o, en su caso, lesionados con la conducta irregular, a fin de lograr el restablecimiento del estado constitucional democrático de derecho.



TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MÉXICO

- Que disuada la comisión de conductas irregulares, a fin de propiciar el absoluto respeto del orden jurídico en la materia electoral.

A partir de los parámetros citados, se realiza la calificación e individualización de la sanción con base en elementos objetivos concurrentes; es decir, una vez acreditada la violación a la normatividad electoral y la responsabilidad, la autoridad electoral debe tomar en cuenta la gravedad de la responsabilidad en que se incurra, las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones externas y los medios de ejecución; la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones y, en su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.

Una vez hecho lo anterior, procede determinar la clase de sanción que legalmente corresponda, tomando en cuenta, entre otras, las siguientes directrices:

- La importancia de la norma trasgredida, es decir, señalar qué principios o valores se violaron o se vieron amenazados y la importancia de esa norma dentro del sistema electoral (principio, valor, ordenamiento, regla).
- Efectos que produce la trasgresión, los fines, bienes y valores jurídicos tutelados por la norma (puesta en peligro o resultado).
- El tipo de infracción, y la comisión intencional o culposa de la falta, análisis que atañe verificar si el responsable fijó su voluntad para el fin o efecto producido, o bien, pudo prever su resultado.
- Si existió singularidad o pluralidad de las faltas cometidas, así como si la conducta fue reiterada.

Es oportuno precisar que al graduar la sanción que legalmente corresponda, entre las previstas en el CEEM, como producto del ejercicio mencionado, si la sanción escogida contempla un mínimo y un máximo, se deberá proceder a graduar la sanción en atención a



las circunstancias particulares teniendo como base el mínimo y, en su caso, justificar la imposición de la sanción que se vaya elevando.

Ahora, toda vez que en la especie se acreditó esencialmente la inobservancia de los artículos 443, párrafo 1, incisos a) y k) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 25, párrafo 1, inciso t), 27, 28, numerales 1 y 2 de la Ley General de Partidos Políticos; 61 del CEEM; 7 y 23, párrafo primero, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, ello permite a este órgano jurisdiccional imponer alguna de las sanciones previstas en la legislación electoral local.

Al respecto, los artículos 460, fracciones I y VIII, y 471, fracción I del CEEM, establecen que son infracciones de los partidos políticos el incumplimiento de las obligaciones señaladas en las disposiciones de la Constitución Política; Ley General de Partidos Políticos y el propio CEEM, así como el incumpliendo a las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información; por lo que se enumera un catálogo de sanciones susceptibles de imponerles.

Por tanto, se procede a determinar las particularidades de la conducta, a fin de tomar una decisión fundada y motivada en donde se ponderen todos los elementos para definirla en términos de la legislación electoral local.

I. Circunstancias de modo, tiempo y lugar

Modo. El PRI, incurrió en una trasgresión de diversas disposiciones legales en materia constitucional y legal, pues no entregó la información en los términos ordenados en el numeral dos del Resolutivo Segundo de la Resolución del Recurso de Revisión 02516/INFOEM/IP/RR/2017, emitida por el INFOEM.

Tiempo. Puede establecerse que la temporalidad de la falta correspondió al veinticinco de abril de dos mil diecinueve, fecha en que mediante acuerdo número A/02516/2017 la Contraloría interna y Órgano de Control y Vigilancia del INFOEM determino el



incumplimiento al numeral dos del Resolutivo Segundo de la Resolución del Recurso de Revisión 02516/INFOEM/IP/RR/2017.

Lugar. Las circunstancias acontecidas ocurrieron dentro de la demarcación del Estado de México, pues la información solicitada se vincula al actuar en esta entidad federativa, esto es, del INFOEM.

II. Bien jurídico tutelado

Como se razonó en la presente sentencia, el PRI, no observó las disposiciones constitucionales y legales en cuanto a garantizar a las personas el acceso a la información pública, infringiendo el derecho fundamental de acceso a la información pública, vulnerando lo previsto por los artículos 443, párrafo 1, incisos a) y k) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 25, párrafo 1, inciso t), 27, 28, numerales 1 y 2 de la Ley General de Partidos Políticos; 61 del CEEM; 7 y 23, párrafo primero, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

III. La trascendencia de la norma trasgredida

Por lo que hace a la norma trasgredida es importante señalar que puede actualizarse un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia electoral, así como de transparencia y acceso a la información; o bien, únicamente su puesta en peligro a los principios vulnerados.

En el caso que nos ocupa, se advierte que la conducta atribuida al infractor, solo consistió en la omisión de entregar información pública; sin que con ese hecho se hubiesen afectado valores sustanciales.

IV. Tipo de infracción

Al respecto, las faltas pueden actualizarse como una infracción de: Resultado o de peligro; y, ésta a su vez de peligro abstracto o de peligro concreto.



TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MÉXICO

Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico tutelado por la norma administrativa.

En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), no es necesario que se produzca un daño material sobre el bien jurídico protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración al supuesto contenido en la norma. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la sentencia recaída al expediente SUP-RAF-188/2008, ha señalado que en las infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico; por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro el bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma anticipada la conducta. En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto).

En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma, infringida con la conducta del partido denunciado, es la omisión de otorgar información pública. En ese entendido, la irregularidad imputable a éste se traduce en "peligro abstracto", puesto que no queda acreditado en autos que se haya ocasionado un daño directo y real



a dichos principios, ni que hubiese existido un peligro latente; sino que, la infracción dependió de la violación al derecho fundamental de acceso a personas a información pública de un partido político; esto es, solo se puso en peligro el mismo.

V. Beneficio o lucro

No se acredita un beneficio económico cuantificable, a favor del infractor, puesto que el objeto de la controversia consistió en la omisión de otorgar información pública, en contravención a las reglas establecidas para los partidos políticos.

VI. Intencionalidad

No obra en autos del expediente prueba alguna que acredite el dolo por parte del infractor; ello, porque el dolo significa *una conducta que lleva implícito el engaño, fraude, simulación o mentira*¹⁰; e implica: **a)** el conocimiento de la norma. y **b)** la intención de llevar a cabo esa acción u omisión; cuestiones que no se comprueban en el caso que nos ocupa. Al respecto, resultan aplicables las Tesis *1a. CVI/2005* de rubro: "DOLO DIRECTO. SUS ELEMENTOS"¹¹ y *I.1o.P.84 P* titulada: "DOLO EVENTUAL. COMPROBACIÓN DE SUS ELEMENTOS CONFIGURATIVOS POR VÍA INFERENCIAL INDICIARIA"¹².

No obstante, se advierte la inobservancia de la norma por parte del PRI, sin que se cuenten con elementos que permitan presumir el dolo en la conducta.

VII. Contexto fáctico y medios de ejecución

En la especie, debe tomarse en consideración que el denunciado contaba con un plazo cierto y preciso establecido en la resolución para el cumplimiento a lo ordenado; que existe certeza del día, hora y minutos de la notificación, además de que tenía a disposición la plataforma electrónica denominada SAIMEX que funciona las

¹⁰ Criterio visible en SUP-RAP-125/2008 y ST-JRC-27/2015

¹¹ PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

¹² PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

veinticuatro horas para poder dar cumplimiento en tiempo a cada uno de los aspectos decretados en las determinaciones finales del órgano garante.

VIII. Singularidad o pluralidad de la falta

La infracción atribuida al partido denunciado es singular, dado que no obra en autos la existencia de diversas infracciones, faltas administrativas u algún otro acto ilegal igual a la sancionada.

IX. Calificación de la falta

En atención a las circunstancias de modo, tiempo y lugar; el beneficio obtenido; la intencionalidad; el contexto factico y medio de ejecución; así como que en la conducta desplegada sólo quedó demostrada la omisión de otorgar información pública, en contravención al derecho de acceso de personas a información pública, por lo que se considera procedente calificar la falta como **leve**.

X. Reincidencia

A criterio de este Tribunal Electoral, se considera que no existe reincidencia en la infracción cometida por el PRI, en virtud de que de conformidad con el artículo 473 del CEEM, se considerará reincidente al infractor que habiendo sido declarado responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se refiere el Código Electoral local, incurra nuevamente en la misma conducta infractora al mencionado ordenamiento legal, lo que en el presente caso no ocurre.

XI. Condición económica

En el asunto que nos ocupa, no es posible determinar la condición económica del infractor; por lo que, sólo puede tomarse en cuenta las condiciones particulares de su participación, razonadas con antelación.

Además, cabe destacar que el análisis de la condición económica para la imposición de la sanción, sólo es procedente cuando la



naturaleza de la sanción lo amerite, al tener el carácter de económica, pues solo en estos casos es dable su estudio para no incurrir en la imposición de multas excesivas. Lo que en el caso no acontecerá.

XII. Eficacia y Disuasión

Al respecto, cabe decir que la imposición de la sanción debe ser adecuada para asegurar la vigencia del derecho fundamental de acceso a la información pública, a fin de lograr el restablecimiento del estado constitucional democrático de derecho y con ello disuadir toda conducta infractora; de manera que, en el caso concreto, debe imponerse una sanción que disuada al PRI, de volver a cometer una conducta similar a la sancionada y además debe tener como efecto reprimir la amenaza de ser reincidente, propiciando mediante la sanción que se impone el absoluto respeto del orden jurídico en la materia.

XIII. Individualización de la Sanción

El artículo 471, fracción I del CEEM, dispone el catálogo de sanciones a imponer cuando se trate de partidos políticos: **a)** amonestación pública; **b)** multa de cinco mil hasta diez mil cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en la entidad; **c)** la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que le corresponda, por el periodo que señale la resolución; y, **d)** la cancelación de su registro como partido político, tratándose de partidos políticos locales.

Tomando en consideración las particularidades de la conductas señaladas en las fracciones que anteceden, este Tribunal considera que las sanciones previstas en el artículo 471, fracción I, incisos b) al d) del Código electoral local de la citada disposición legal, serían excesivas dadas las particularidades del caso concreto ya analizadas; en consecuencia, se estima que la **sanción idónea y eficaz** que debe imponerse al PRI, debe ser la mínima; sin que ello implique que ésta incumpla con sus fines de eficacia y disuasión.

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MÉXICO

Conforme a las consideraciones anteriores, se procede a imponer al PRI, la sanción consistente en una **AMONESTACIÓN PÚBLICA**, establecida en el artículo 471, fracción I, inciso a) del CEEM, la cual constituye en sí, un apercibimiento de carácter legal para que considere, procure o evite repetir la conducta desplegada.

Ello así, en virtud de que **una amonestación** como la que aquí se establece, constituye a juicio de este órgano jurisdiccional, una medida eficaz y ejemplar a efecto de disuadir la posible comisión de conductas similares en el futuro; pues, hace patente a quien inobservó la normativa por cuanto hace a garantizar el acceso de los ciudadanos a la información pública; además, la amonestación reprime el incumplimiento a la normativa legal. Para establecer la sanción, se tomaron en consideración las particularidades del caso, consistentes en:

- La existencia del incumplimiento de una resolución emitida por el INFOEM.
- Se trató de una omisión.
- La conducta fue culposa.
- Existió singularidad de la falta.
- Se vulneró el derecho fundamental de acceso a información pública.
- Se trató de un "peligro abstracto".
- Existió responsabilidad directa por parte del PRI.
- No existió reincidencia.

Cabe precisar, que el propósito de la amonestación es hacer conciencia sobre que la conducta u omisión realizada ha sido considerada ilícita. Y, una amonestación pública **se torna eficaz en la medida en que se le publicite**; esto es, hacer del conocimiento del mayor número de personas que el sujeto en cuestión, inobservó disposiciones legales.

Por lo tanto, este tribunal considera que **para una mayor publicidad de la amonestación pública que se impone al PRI, la presente**

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MÉXICO

sentencia se deberá publicar en los estrados y en la página de Internet del IEEM, del INFOEM y de este órgano jurisdiccional.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 116 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 383, 390, fracción I; 405, fracción III; 458 y 485 del Código Electoral del Estado de México, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara la **existencia** de la violación en términos de la presente sentencia.

SEGUNDO: Se **amonesta públicamente** al Partido Revolucionario Institucional, conforme a lo razonado en este fallo.

TERCERO: Se **vincula** al Instituto Electoral del Estado de México y al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, para que la presente resolución sea publicada en sus estrados y en su página electrónica.

NOTIFÍQUESE, personalmente la presente sentencia en términos de ley; **por oficio** a la Secretaría Ejecutiva del IEEM; y por **estrados** a los demás interesados, atento a lo dispuesto en los artículos 428 del CEEM 60, 61, 65 y 66 del Reglamento Interno de este órgano jurisdiccional. Asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal Electoral.

En su caso, devuélvanse los documentos originales que resulten pertinentes, previa constancia legal que se realice al respecto, y en su oportunidad archívese el expediente como total y definitivamente concluido.

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, en sesión celebrada el uno de octubre dos mil diecinueve, aprobándose por **unanimidad** de votos de los Magistrados,



TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MÉXICO

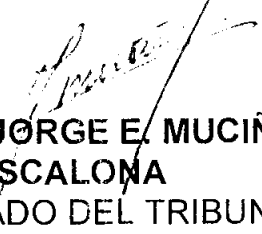
Crescencio Valencia Juárez, Presidente; Rafael Gerardo García Ruíz, Jorge E. Muciño Escalona, Leticia Victoria Tavira y Raúl Flores Bernal, siendo ponente el primero de los nombrados, quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos, que da fe.



DR. EN D. CRESCENCIO VALENCIA JUÁREZ
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL



M. EN D. RAFAEL GERARDO GARCÍA RUÍZ
MAGISTRADO DEL TRIBUNAL



M. EN D. JORGE E. MUCIÑO ESCALONA
MAGISTRADO DEL TRIBUNAL



M. EN D. LETICIA VICTORIA TAVIRA

MAGISTRADA DEL TRIBUNAL



M. EN D. RAÚL FLORES BERNAL

MAGISTRADO DEL TRIBUNAL



M. EN D. JOSÉ ANTONIO VALADEZ MARTÍN
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS